

La política minera neoliberal: Aproximaciones a los aspectos jurídicos y políticos de la modernización de la minería durante la dictadura cívico-militar chilena. Chile 1973-1983

Neoliberal mining policy: Approaches to the juridical and political aspects of mining modernization during the Chilean civil-military dictatorship. Chile 1973-1983

Ximena Ortiz Morales*

PROGRAMA DOCTORADO EN HISTORIA, UNIVERSIDAD DE SANTIAGO, CHILE
<https://orcid.org/0000-0002-3549-785X>

RESUMEN:

Este artículo tiene por objetivo evidenciar el cambio en la política minera expresado en la legislación propugnada por los neoliberales involucrados en la dictadura cívico-militar chilena. Dando cuenta de algunos debates desarrollados entre militares y civiles como expresión de las tensiones que se desarrollaron en el encuentro de dos miradas diferentes en la junta militar.

Palabras claves: Minería, Neoliberalismo, Modernización capitalista, Legislación, Dictadura.

Abstract:

This article aims to evidence the change in mining policy expressed in the legislation advocated by the neoliberals involved in the Chilean civil-military dictatorship. It examines some of the debates developed between military and civilians as an expression of the tensions that developed in the encounter of two different perspectives in the military government.

Key Words: Mining, Legislation, Neoliberalism, Capitalist modernisation, Dictatorship.

*xortizmorales@gmail.com

I. INTRODUCCIÓN.

El 11 de septiembre de 1973 las fuerzas armadas pusieron fin al gobierno de Salvador Allende tomando el poder e interrumpiendo la democracia. Lo que vino después, fue un proceso complejo caracterizado, a grandes rasgos, por el desarme del Estado de compromiso, la persecución política y la instalación de una economía de crecimiento, consecuencia de un Estado regulador y subsidiario.

Este artículo tiene por objeto abordar la neoliberalización de la minería a través de la legislación minera, como una política dirigida a transformar la actividad productiva, en dicho sentido, se busca aportar a la comprensión de las transformaciones a la actividad minera durante el periodo dictatorial.

El periodo correspondiente a la dictadura cívico-militar ha sido estudiado desde diferentes ángulos a lo largo de los últimos dos decenios. Por ejemplo, en materia económica y política, la pugna de proyectos y visiones confrontadas entre grupos o sectores en el seno de la junta militar ha sido relevante para el análisis y la observación del proceso correspondiente al régimen de Pinochet.

Tal es el caso de algunos estudios que se han centrado en abordar dicho proceso tomando el protagonismo que tuvieron los civiles dentro de la dictadura, abordando la complicidad económica de distintos sectores civiles durante el régimen militar (Bohoslansky et.al 2019).

Dentro del debate y pugna por generar un proyecto político, la legislación minera no estuvo exenta y se vio impactada por los cambios realizados en materia jurídica. Las modificaciones a la legislación minera realizadas entre 1974 y 1983 se inscriben dentro del proceso general de desarrollo económico de la dictadura, teniendo alcances tangibles tanto en la economía como en las relaciones políticas gestadas dentro de la junta militar, develando la disputa de los proyectos neoliberal y desarrollista.

La historiadora Verónica Valdivia (2001; 2003), ha trabajado extensamente sobre las pugnas en el seno de las fuerzas armadas, tanto de la junta militar como de los proyectos económicos. En este

sentido, el ascenso del neoliberalismo y el debate entre nacional-desarrollistas y neoliberales, permiten el análisis, no solo de las dinámicas del poder en las fuerzas castrenses, sino también de la presencia e influencia intelectual de civiles en la junta militar, que intervinieron directamente en la modelación de la legislación minera.

Valdivia (2003, 204) señala que los nacionalistas no procuraron generar un proyecto político que sustentara a la junta militar, dado que esta, a través del golpe, fue la expresión militarizada de su posición política, en conjunto con la derrota partidista que produjo la toma de posición extrema y violenta que detonó el ascenso de las fuerzas castrenses. En dicho sentido, los neoliberales si poseían un proyecto refundacional y globalizador que desplegaron de inmediato y que finalmente sustentó a la junta militar.

Este proceso, se trató del dilema entre sentido restaurador y sentido refundacional, que, según señala Pilar Vergara (1984, 7;14;21) tuvo un viraje ideológico en octubre de 1973 con las declaraciones subsecuentes de la junta militar sobre “su misión” y que, según la autora, terminó por predominar la posición refundacional, venciendo por sobre la anterior, a través de la instalación, por medio del viraje ideológico gremialista-neoliberal, de la necesidad de promover una revolución capitalista como vehículo refundacional.

Los estudios sobre el desarrollo político y económico de la dictadura han avanzado en comprender como se instaló el sistema neoliberal y cuáles fueron los avatares del choque entre el proyecto militar y el proyecto civil, en ese sentido, este estudio busca aproximarse a los cambios concretos que produjo la instalación del neoliberalismo y la consecuente victoria por sobre el desarrollismo en el seno de la actividad minera, y esta aproximación se realizará sobre la base de los cambios en materia legislativa como expresión de un sistema político cambiante.

De esa manera, los escasos estudios que abordan la legislación minera en Chile están centrados en abordar la relación jurídica entre el Estado y la explotación minera, un ejemplo de ello es el estudio pionero de 1920 de Thomas Palmer. El artículo se centra en exponer

los alcances que posee el Estado y los privados en cuanto a las leyes mineras presentes en el país en esos años, realizando a su vez una aproximación a la evolución de las ordenanzas jurídicas heredadas de España y en el código de minería de 1888 (Palmer, 1920).

Este trabajo puede ser complementado con el estudio de Zunilda Carvajal del Mar (2014), que aborda el desarrollo del derecho minero en Chile, la autora se centra en la relación entre el Estado y las minas dando cuenta de la evolución de los códigos mineros a lo largo de la historia de Chile, hasta 1971 cuando las modificaciones de la reforma constitucional o nacionalización del cobre ponen en tensión la relación histórica que se había establecido entre el Estado y los yacimientos mineros.

Para adentrarse al estudio de la desnacionalización del cobre, es destacable y significativa la investigación de Julio Pinto quien, en el marco de una investigación para el colegio de ingenieros de minas de Chile, escribió un capítulo de libro que se tituló *Historia de la minería en Chile, siglos XIX y XX*, sintetizado por Ricardo Nazer titulado: *Nacionalización y privatización de cobre chileno 1971-2002* (Pinto y Nazer, 2004). En él se desarrolla un análisis de la desnacionalización del cobre y se realiza un breve recuento histórico sobre el proceso en el que la junta militar a través del Decreto Ley 600 privatizó este mineral.

Un trabajo más profundo y desde la perspectiva de la ecología, es el estudio de Mauricio Folchi Donoso titulado *La insustentabilidad del boom minero chileno: política y medioambiente 1983-2003* donde se aborda, a través de un repaso por la historia *extractiva* reciente del país, la instalación de un marco legal favorable a las grandes empresas mineras y al desarrollo de megaproyectos mineros. Asimismo, el historiador releva los problemas medioambientales que trae consigo el modelo minero neoliberal chileno y como la legislación medioambiental tuvo que ajustarse a la legislación minera, producida durante la dictadura, conservada y cimentada durante los gobiernos de la transición (Folchi, 2003).

A partir del debate caracterizado, esta investigación busca insertarse desde un abordaje histórico de la legislación minera

en dictadura para aportar al debate en torno a la transformación productiva de la minería en el país desde la legislación y la política, centrando el foco en la importancia que las políticas mineras tienen para el devenir de la actividad y el impacto en los trabajadores.

Abordar las transformaciones a la legislación minera durante el periodo dictatorial tiene como objetivo dar respuestas preliminares a las problemáticas que enfrentó la actividad durante dicho periodo y que hasta el día de hoy generan debate. Así nuestro problema de investigación está enfocado en las transformaciones a la macro matriz productiva minera a través de la legislación minera destinado a fomentar la minería privada en el país.

El proceso de privatización de la minería se inserta dentro del proceso general de modificaciones realizadas por la dictadura. La principal actividad económica vive una serie de transformaciones que pueden ser cuantificadas a partir de las tres ordenanzas jurídicas que impulsan su completa modernización entre 1974 y 1983, estas son el Estatuto de la inversión extranjera o Decreto Ley 600, la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras y el Código de minería. Este conjunto legislativo es la cristalización de la neoliberalización de la minería chilena.

En este sentido, los cuerpos jurídicos que componen nuestro objeto de investigación fueron producidos dentro de la primera fase de reformas de la dictadura, que de acuerdo con Bárbara Stallings (2001) se caracterizó por la aplicación rígida de modificaciones y fueron el resultado de la imposición de la visión neoliberal y transnacional de la minería. a partir de lo anterior, resulta necesario preguntarse: ¿cuáles fueron las transformaciones que el neoliberalismo buscó impulsar en la actividad minera a través de la legislación minera? Y ¿en qué medida estas develan la pugna de proyectos en el seno de la junta militar?

Para abordar estas cuestiones, se caracterizarán las modificaciones a la legislación minera y se indagará en los debates que marcaron su propuesta e implementación. La selección de fuentes documentales está limitada a los cuerpos legislativos que componen las modificaciones, así como también a fuentes escritas emanadas desde

el Estado, tales como las sesiones secretas de las junta militar -símil del ejercicio legislativo- y prensa oficial y de oposición.

Dado que este artículo busca, como una primera aproximación, observar la pugna de proyectos y la instalación de una legislación neoliberal, como hipótesis,

Se plantea que el neoliberalismo se impuso no sin resistencia generando rupturas internas en el seno de la dictadura y desplazando las voces desarrollistas al interior de la junta militar, que fueron paulatinamente sustituidas por neoliberales dando paso a un intercambio de poder dentro de la junta militar. La minería sirvió como vehículo de la implementación del neoliberalismo, junto a la reforma de pensiones y el trabajo, de las transformaciones económicas neoliberales, por tanto, fue sujeta de inmediato a cambios estructurales para atraer a la inversión extranjera. Las reformas a la legislación minera buscaron introducir los cambios necesarios para dar paso al extractivismo acelerado de los recursos, despojando al Estado de la propiedad de los recursos y ulteriormente dando paso a una minería privada y con características de enclave mediante la entrega de concesiones mineras.

II. EL PROBLEMA DEL DOMINIO EMINENTE O LA DESNACIONALIZACIÓN “TEÓRICA”.

Hacia 1980, las modificaciones legislativas de la minería se ligaron de manera estrecha al proceso que dio luz a una nueva Constitución política. Esto a raíz del tipo de régimen jurídico que tuvo el Estado a lo largo de su historia, a saber, el dominio eminente, que es el derecho superior del Estado a todo tipo de propiedad (Carvajal del Mar, 2014: 19). Esta teoría jurídica ha tenido problemas a lo largo del tiempo, justamente a raíz de su aplicación en materia de derecho de minas. Lo cierto es, que dicho principio, que tiene origen medieval, se complementó con el tipo de relación que se estableció entre el propietario de la tierra, el descubridor del yacimiento y el Estado. Dichas partes, componen cualquier actividad extractiva-productiva y sobre ellas se posaría cualquier legislación (Carvajal del Mar, 2014: 2).

El dominio eminente permitía, por ejemplo, que una persona natural obtuviese una propiedad minera sin excluir al Estado, que mantenía el dominio de la misma propiedad. Por esa razón es que se consideró a lo largo del tiempo a dicho régimen como una suerte de existencia jurídica inofensiva o ambigua¹, de acuerdo a Vergara Blanco (2006: 218):

“Al predicamento anterior, es verdad, daba lugar la aparente ambigüedad del artículo 591 del Código Civil que, por un lado, calificaba al Estado como “dueño” de las minas, pero que, en seguida, a los particulares les daba la facultad de “disponer de ellas como dueños”; ambigüedad acrecentada en los códigos de minería del siglo XIX y XX, los que calificaban al concesionario minero como titular de una ‘propiedad minera’”.

No obstante, a lo largo de la historia minera chilena, dicho principio se mantuvo, sin afectar el tipo de régimen productivo, y sin que la ambigüedad legal entorpeciese la actividad minera. Especialmente, porque la legislación materializada en el Código minero tiene por objetivo regular la actividad minera, más allá del tipo de régimen legal por el cual el Estado se guía respecto de la actividad productiva o extractiva.

Bajo el principio del dominio eminente del Estado sobre el territorio y sus recursos, el gobierno de Salvador Allende en 1971 procedió a expropiar los tres yacimientos de cobre, mas importantes del país, que correspondían a la Gran minería de cobre, haciendo valer el derecho del Estado como propietario superior de los recursos del país. La nacionalización del cobre se impulsó bajo la ley 17.450, que fue una enmienda constitucional aprobada el 11 de julio de 1971, que reformó la Constitución política del Estado y estipuló en su artículo primero, inciso B:

“El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales”².

Este principio fundamental de la ley 17.450 respecto del dominio del Estado sobre las minas, fue el escollo que enfrentaron

los intelectuales neoliberales cuando pretendieron iniciar la modernización de la actividad minera. No obstante, luego del golpe de Estado, la junta militar no modificó el principio sobre el cual el Estado tenía derechos sobre los recursos del territorio soberano, sino, como veremos, una Ley Orgánica Constitucional transformaría –por extensión– el principio de dominio eminente en dominio patrimonial y despojaría al Estado de las facultades legales que pudiese tener sobre el control de los recursos.

III. LA TRIADA DE LA POLÍTICA MINERA NEOLIBERAL: EL NEOLIBERALISMO Y LOS FUNDAMENTOS DE LA CONCESIÓN PLENA.

1. EL DL 600 O ESTATUTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA.

Al momento de la llegada al poder, la junta militar no contaba con un proyecto claro solo tenían a mano las sugerencias de *El ladrillo*³, preparadas algunos meses antes del golpe de Estado y que fungió como base de las políticas de los militares. De esa forma, buscando restaurar la confianza de las empresas que explotaban minas a gran escala en Chile se promulgó, en 1974, la primera versión del Decreto ley 600 (Ortiz, 2019; Folchi, 2003; Agacino et.al 1998) cuyos fundamentos habían sido plasmados –casi literalmente– en *El ladrillo*.

El DL 600 tuvo por objetivo entregar garantías de desarrollo de la inversión extranjera en Chile. Su primera versión y las sucesivas modificaciones a las que estuvo sujeto, estuvieron encaminadas en establecer las “reglas de juego”⁴ como parte de la necesidad que tuvo la política militar de restaurar la confianza de los inversores extranjeros. El DL 600 entregó garantías de desarrollo a los capitales extranjeros en Chile, permitió la acumulación de capital de las trasnacionales a través del extractivismo acelerado y la desregulación económica, consecuente con las primeras sugerencias del neoliberalismo.

Al respecto, *El Mercurio* indicaba en 1982⁵ que 32 proyectos mineros de inversión extranjera se encontraban siendo procesadas, además de algunos proyectos públicos que estaban siendo reformados. Estos datos se suman a la estadística hacia 1981 que establecía que el 84% de aportes de capital extranjero correspondía a la minería.

Los 32 nuevos proyectos de minería aportaban 5.492 millones de dólares, de los cuales 623 millones habían efectivamente ingresado.

Si bien es cierto, tanto el número de proyectos como los capitales extranjeros involucrados eran sustantivos, estos estaban en proceso de prospección minera, es decir, aun no se comenzaban a explotar los yacimientos ni el capital había sido utilizado efectivamente, así es posible advertir que la situación tanto de explotación de yacimientos como de exportaciones entre 1974 y 1982 no había variado sustantivamente.

Los fundamentos para instaurar una política clara y concisa de inversión extranjera durante la dictadura estuvieron basados en producir un giro exportador de la economía chilena. Sin embargo, esa relación no se produjo con el DL 600 por sí solo, al contrario, como se ha planteado, contribuyó a que las transnacionales generaran acumulación de capital expresado en concesiones mineras de exploración, que les permitieron tener cierto dominio sobre el territorio mientras se solidificaban los pilares de la modernización capitalista neoliberal.

La ausencia de explotaciones y el aumento de las tareas de prospección de las transnacionales mineras se produjo debido a que las condiciones de explotación y desarrollo de proyectos mineros no estaban dadas para los inversores a causa de la vigencia de la normativa que sostuvo la nacionalización del cobre, que permitía la expropiación de recursos por parte del Estado. En consecuencia, la inversión extranjera entre 1974 y 1980 se concentró en prospectar yacimientos. (Ortiz, 2019: 153-154).

2. LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE CONCESIONES MINERAS. José Piñera fue el ideólogo de la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras y postuló en su libro *Fundamentos de la Ley constitucional minera* (Piñera, 2002) la necesidad de *ponerle el cascabel a la minería* como una acción que pudiese transformar los principios y modificaciones que dieron luz a la nacionalización del cobre sobre la base de que el socialismo y el Estado de compromiso, como modelos políticos y económicos, debilitan el principio de propiedad minera en Chile.

Las principales medidas del proyecto de ley orgánica que fue entregado a la junta militar y que fue discutido por las autoridades militares con José Piñera en calidad de ministro de minería el 3 de noviembre de 1981 (Piñera, 2002: 33) indicaban que las concesiones de exploración tendrían una duración de dos años pudiendo ser renovables indefinidamente.

Por otra parte, las concesiones de explotación tendrían una duración indefinida, no importando factores tales como agotamiento de mineral, traspaso de activos empresariales o inactividad del yacimiento. La única forma de que una concesión minera perdiera validez se debía al no pago de las patentes o por renuncia del propietario⁶.

Su propuesta se basó en anteponer, conceptualmente, la valorización de un bien -o una agrupación empresarial- y el valor comercial de la empresa (Piñera, 2002: 23), por tanto, los activos de una empresa valdrían en la medida en que estos pudiesen generar utilidades positivas para el futuro.

Siguiendo este principio de libre mercado, el primer paso fue establecer que la concesión minera involucrara el derecho de explotar y seguir explotando indefinidamente. De esa forma habría, según explicó Piñera, utilidades continuas y flujos de caja. La idea anterior, se basa en dos puntos clave (Piñera, 2002: 35):

“la naturaleza del derecho de concesión que se establecería en la Ley constitucional y las condiciones bajo las cuales el titular mantendría dentro de su patrimonio este derecho de concesión”.

Así se configuró lo que Piñera denominó *concesión plena*. Dicha concesión, está protegida por el derecho a la propiedad dentro de las normas que garantizan el derecho privado, así el titular puede disponer de ella de cualquier forma.

Este principio fundamental y el más trascendental de la política minera neoliberal se constituyó como un permiso para traspasar al titular privado los derechos establecidos en la Constitución, es decir, el Estado continúa teniendo el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas consignado en la *Carta Magna*, sin embargo, solo el propietario o titular privado de

una concesión minera tiene el derecho a hacer uso de ellas. De esa forma, la concesión plena modificó el carácter eminente del dominio estatal y lo convirtió en dominio patrimonial. La Ley orgánica constitucional prosiguió el camino que había trazado el DL 600 al definir los lineamientos principales del desarrollo de un nuevo sistema de extracción minera con claras bases neoliberales.

La concesión plena se instituyó bajo dos ideas teóricas del modelo neoliberal, en primer lugar, la explotación acelerada de los recursos bajo la premisa de que “el valor de los recursos explotados hoy es mayor que el de los explotados mañana”⁷ y, en segundo lugar, la idea de que el Estado y sus factores políticos no deben influir en la producción de un mineral, ya que “reservar la producción de un mineral al Estado deprime el desarrollo de un recurso” (Piñera, 2002: 39). Si a estas dos ideas se suma el componente de libertad de ingreso y desarrollo de inversión extranjera expresado en millones de dólares, que fue dado por el DL 600, se configura la minería privada bajo el neoliberalismo. Restaba por tanto el escollo del inciso sexto del artículo 24 de la Constitución que establece las disposiciones del Estado sobre los recursos naturales.

3. DEBATE DE DESARROLLISTAS Y NEOLIBERALES.

Las nociones de *reglas de juego, espacio geométrico y los alcances de la visión sobre la propiedad minera* parte de la estructura conceptual tecnocrática, traería consigo no solo la narrativa ideológica empresarial neoliberal, sino también, las definiciones de lo que, en palabras de Piñera, son los “atributos jurídicos necesarios para garantizar al inversionista privado y también el resguardo nacional”⁸ y que determinan la concesión plena.

Instalar estas ideas y convencer a los militares no fue fácil, puesto que existen indicios de resistencia de parte de la junta. Una primera discusión se produjo en el marco de la preparación del cuerpo jurídico de la futura carta magna, en 1976, cuando Jaime Guzmán como representante del poder judicial y Enrique Ortuzar representando a las comisiones legislativas expusieron a la junta algunas propuestas. Al respecto Gustavo Leigh, que estuvo de acuerdo con la apertura al

libre mercado y a la instalación de inversiones extranjeras, así como el fomento a aquellas que ya se encontraban en el país, cuestionó el sentido de la legislación: “¿Cuál es el objeto de entrar a un cambio que va a revolucionar todo el concepto de pertenencia minera?”⁹

Es posible sugerir, dado el tenor del debate que la preocupación de Leigh se basó en las eventuales implicancias de entrega de territorio soberano a empresas extranjeras cuyas inversiones se dirigiesen a la minería, y las consecuencias que ello pudiese tener respecto de la seguridad nacional.

En este sentido Leigh se posicionó protectoramente del sentido primario de la pertenencia minera ya que el Estado poseía los derechos absolutos más allá de la presencia de un capital foráneo en la extracción, ya que las condiciones de establecimiento de capitales establecidas en el decreto ley 600 no incluían la entrega de propiedad. Al respecto Leigh señaló: “Si nosotros queremos impulsar la explotación con capitales extranjeros, no podemos enajenar el suelo”¹⁰.

La postura del General Leigh se sumó a las teorías que surgieron tras la salida del ministro de minería Agustín Toro, que a causa de una perspectiva nacional desarrollista fue removido de los cargos de poder dentro de la administración de la junta militar. El revuelo provocado por la salida del entonces ministro de minería generó la molestia de Pinochet con respecto al pensamiento contrario a las órdenes de la junta. El General fue enfático en declarar: “El ministerio de minería tiene que ejecutar la política que nosotros hayamos concebido”¹¹.

Esto es ejemplo de lo que algunos historiadores han desarrollado sobre el debate en torno al nacional desarrollismo versus el neoliberalismo dentro del seno de la junta militar que ha sido ampliamente caracterizado por Verónica Valdivia (2003) y Luis Corvalán (2001) y que ofrecen una perspectiva de orden político. Al respecto, la historiadora planteó la división de las fuerzas en torno a la disputa que culminó con la salida de Gustavo Leigh de la junta y la consumación del poder de Pinochet sobre la misma. Valdivia plantea que la salida de Leigh significó la consolidación del proyecto

neoliberal en las filas de los generales golpistas y marcó el descenso del pensamiento estatista, permitiendo la entrada de los Chicago boys al ascenso del pensamiento neoliberal castrense y que permite a la vez afianzar el modelo neoliberal en la Constitución política de 1980.

No obstante, la salida de Leigh, los restantes miembros de la junta tampoco se mostraron absolutamente convencidos de la política minera neoliberal. Para el Almirante José Toribio Merino, miembro de la junta militar, la Constitución política se posaba sobre todas las leyes y disposiciones y no debía dejar lugar a dudas o incongruencias legales, lo que se contrapuso con la perspectiva de José Piñera que señaló que la duración indefinida de las concesiones de explotación tenía una razón técnica que estaba basada en el proceso de reinversión de capital en la actividad productiva y extractiva, que incluye la explotación de un yacimiento y que caracteriza a la minería, siendo indispensable a la hora de establecer contratos de inversión¹². Se desprende del relato del ministro, expuesto a continuación, que este elemento sería una condición para el desarrollo de la inversión extranjera:

“Si no existe una duración indefinida y un plazo, que por naturaleza deberá ser arbitrario, necesariamente al acercarse a ese plazo el inversionista no invertirá lo óptimo, provocando, entonces, un daño al país, a la economía y a los trabajadores en cuanto eso disminuirá la fuente de trabajo, las remuneraciones, los impuestos pagados al Fisco. Por consiguiente, estimamos precisamente que no tener esa duración indefinida acarrea este problema de no conciliar los verdaderos intereses del país, que es que se maximice la inversión en minería”¹³.

Como se ha dicho, una de las características de la ley minera es que trasladó la potestad de fiscalizar el pago de patentes hacia los tribunales¹⁴. Es decir, la entidad que puede revocar una concesión minera por causa del no pago de la patente minera es el tribunal donde la concesión se entregó.

La concesión indefinida bajo condición de pago de una patente asegura la existencia de la condición de la propiedad. Dado que la

concesión minera entrega propiedad indefinida del subsuelo a una empresa extranjera. Se desprende de ello, a nuestro juicio, el cambio de estatus legal que tiene un recurso natural, pues deja de ser recurso y se transforma en bien material a partir de la propiedad del suelo y subsuelo que contiene las reservas minerales.

El cobre, como la mayor parte de los minerales, metales, nitratos, gas y agua natural, es un recurso natural no renovable. Por cuanto, las implicancias de un cambio de estatus radican necesariamente en cómo se entiende, regula y administran los recursos, inclusive, cuan racional puede llegar a ser su explotación. Por el contrario, cuando el cobre es considerado un bien transable en el mercado, da paso necesariamente a una explotación irracional y desmesurada del recurso a través del despojo de su categoría de recurso estratégico.

La ley minera indica que las concesiones que se entregan no pueden exceder cierta cantidad de hectáreas, no obstante, también indica que se pueden entregar tantas concesiones como se hayan pedido¹⁵, es decir, la propiedad puede tener perfectamente una cantidad y extensión de territorio considerable junto a las reservas minerales que estén contenidas.

Todo esto fue cubierto por el *manto* de las garantías y claridad de las reglas del juego prometidas a los inversionistas, y sirvió a la consecución de los *verdaderos intereses del país*, tal como expresó el General de Carabineros, Cesar Mendoza: “si deseamos que haya (inversiones) hay que dar facilidades, confianza y seguridad”¹⁶.

José Piñera, en su calidad de ministro de minería, anunció el 2 de diciembre de 1981, durante la inauguración oficial del mineral El Indio¹⁷, que la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras había sido aprobada. En su discurso José Piñera (2002: 38) pronunció:

“Esta ley hará posible que la minería se convierta en el polo de desarrollo de mayor dinamismo de la economía nacional, contribuyendo así decisivamente al gigantesco esfuerzo nacional para sacar a Chile del subdesarrollo y eliminar la extrema pobreza”.

Sus palabras reafirmaron, definitivamente, la dirección de la política minera de la dictadura, donde la transformación de

los elementos que dieron vida a la nacionalización del cobre se convirtió en el fundamento que permitió la instalación de la minería trasnacional.

4. EL CÓDIGO DE MINERÍA DE 1983, LA CODIFICACIÓN DE LA VISIÓN NEOLIBERAL.

Durante la historia de Chile, se han promulgado 5 Códigos mineros: 1874, 1888, 1930, 1932 y finalmente 1983. Los primeros tres reglamentos nacieron inspirados en las Reales Ordenanzas de Nueva España de 1783, los restantes fueron modificados en función de las circunstancias y los objetivos de la política estatal de cada época.

Carvajal Del Mar (2014: 22) plantea que existió, durante los primeros 4 Códigos, un proceso de adecuación a las condiciones de desarrollo de la actividad minera, así como también procesos derogatorios del legado colonial. Los 4 códigos se mantuvieron cohesionados sobre la predominancia del Estado sobre los recursos mientras se adecuaban a los procesos históricos que se desarrollaban en paralelo. El Código de minería de 1983 por el contrario, consagró la política minera neoliberal a la par que reglamentó dicha visión particular.

Este principio cohesionador con que contaron los 4 Códigos anteriores a 1983 fue desecho cuando La ley orgánica constitucional de concesiones mineras condicionó el despliegue del Código minero de 1983. Es decir, el edicto pasó a ser el cuerpo legal que reguló la actividad minera, sin embargo, fue la Ley orgánica de concesiones mineras la que estipuló la entrega de concesiones. Dicho Código de 1983, en su artículo 2°, establece que:

“La concesión minera es un derecho real e inmueble; distinto e independiente del dominio del predio superficial, aunque tengan un mismo dueño; oponible al Estado y a cualquier persona; transferible y transmisible; susceptible de hipoteca y otros derechos reales y, en general, de todo acto o contrato; y que se rige por las mismas leyes civiles que los demás inmuebles, salvo en lo que contraríen disposiciones de la ley orgánica constitucional o del presente Código”¹⁸.

Los fundamentos del reglamento están enfocados en la regulación de la actividad minera, sin embargo, como podemos establecer a partir del artículo 2°, el cuerpo legal perdió la capacidad de regular sobre los recursos naturales.

La junta militar a su arribo al poder en 1973 instauró la modificación de la legislación minera y a la par que formó una comisión que preparase una nueva Constitución, ordenó la preparación de un nuevo Código. Hacia 1975, ya existía disposición de modificar completamente el Código de minería. En marzo del mismo año el ministerio preparó un anteproyecto que fue enviado por el entonces ministro de minería general Agustín Toro al general Pinochet informando que “se realizó el trabajo de proponer la reforma total del Código minero por estimarse que es más conveniente que realizar inicialmente la modificación de algunos aspectos sin el complemento del resto del articulado”¹⁹. A pesar de que hacia 1975 la junta militar estaba trabajando en torno a la adecuación del decreto ley 600, la propuesta de un nuevo Código se mantuvo en espera hasta 1977 cuando el ministerio liderado por Enrique Valenzuela Blanquier comenzó a trabajar en torno a las modificaciones propuestas por la junta militar.

El estudio, preparación, redacción y promulgación del Código minero de 1983 fue realizado luego de la Constitución política de 1980 ya que en ella se establecieron los principios y fundamentos del Estado sobre la propiedad de las minas. *El Mercurio* informó que el Código de minería sustituyó el anteproyecto presentado por José Piñera durante su paso por el ministerio²⁰, retomando gran parte de los postulados desarrollados sobre la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras, pero estableciendo en el derecho de minas, mecanismos que dieran garantía a la constitución de la concesión minera.

Una de las razones más importantes del largo proceso de formulación del nuevo Código de minería fue la actualización de la normativa y la adaptación de la legislación minera al sistema de economía de mercado neoliberal. En este sentido, la declaración del ministro Samuel Lira Ovalle en mayo de 1983, respecto a que

Chile no cuenta con los capitales para llevar a cabo el desarrollo del sector minero²¹ se sustentó bajo la idea que el desarrollo del país debía fundarse en la necesidad de los capitales privados, mientras que el crecimiento sería una *responsabilidad* estatal. De acuerdo con el ministro Lira, el DL 600 ya no era suficiente para la obtención de esos resultados:

“resulta indispensable contar con una legislación que de seguridades a fin de que las inversiones en ella, que son difíciles, que son riesgosas, que son aleatorias, tengan solamente la industria en si misma el riesgo y no lo tengan además en la legislación que la está amparando”²².

Efectivamente, el DL 600 fue un Estatuto destinado únicamente a la inversión, predominantemente extranjera, mientras que el Código entregó las reglas del desarrollo de la actividad, por lo tanto, la normativa máxima que estableció el proceso y los aspectos medulares de la actividad minera se posicionaron sobre el DL 600 y la Ley de concesiones, recogiendo sus principales aspectos y de paso, entregando garantías sobre el desarrollo de la inversión extranjera. A partir de este proceso es posible advertir, que en vísperas de la publicación del Código de minería y la entrada en vigor de la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras, las ordenanzas jurídicas en estudio se fueron reafirmando.

Otro de los fundamentos del Código de minería fue la idea de que el potencial minero del país justificó la explotación intensiva de los recursos a través de las trasnacionales para incorporar la riqueza a la economía nacional. No obstante, esa riqueza se produce a través de la renta de los yacimientos. Teniendo en cuenta que el potencial minero fue el elemento a través del cual se buscó insertar a Chile en los mercados mundiales. Se deriva que, dicho potencial se proyectó sobre la cantidad y exportación de recursos.

El Código minero nació para renovar y adaptar la normativa a los principios del sistema de economía de mercado. Tanto la Constitución Política como la Ley de concesiones contemplaron el dominio eminente, por lo que, a nuestro juicio, el fundamento del Código fue insertar las disposiciones destinadas a dar seguridad

jurídica a los privados para el desarrollo de la inversión. De ese modo, es posible plantear que el abandono definitivo del dominio eminente de los recursos mineros, que había caracterizado al Estado chileno hasta 1973 y que había sostenido las políticas mineras, se produce con el Código de minería de 1983.

Es posible establecer que uno de los fundamentos de su redacción fue aunar las modificaciones en un solo cuerpo y entregar seguridad jurídica a los espacios de reproducción del capital. El Código se enfocó en reforzar la concesión minera y las garantías del desarrollo de la inversión extranjera en el país, tanto para la producción extractiva como para la propiedad minera, en este sentido, esto se reduce a tres principios: la constitución judicial, la duración indefinida y la irrevocabilidad de toda concesión minera.

Al respecto *El Mercurio* estipuló que no se constituye concesión sobre la propiedad de las minas —ya que estas son del Estado— sino sobre las reservas minerales²³. La ley de concesiones mineras, por su parte, desarrolló los principios constitucionales sobre el carácter rentista del Estado, que bien podría ser entendido como la extracción y despojo del derecho del Estado sobre la administración de los minerales.

El ministro de minería Samuel Lira, luego de describir los principales detalles del Código a la junta militar durante la sesión legislativa del 17 de mayo de 1983, finalizó su exposición señalando la importancia de despachar rápidamente el cuerpo legal para que entrase en vigor junto a la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras, ya que “permitirá la concreción de varias inversiones, que se verán perjudicadas en caso de atraso”²⁴. Lira planteó que la falta de legislación significaría la pérdida de varios millones de dólares, si el Código no se publicara antes de fines de agosto de 1983²⁵. A esto se suman las palabras del general Matthei:

“Hay una real urgencia de que esto sea hecho, esté listo y promulgado en el mes de agosto, por razones patrióticas, superior interés de la nación, de manera que estimo que tenemos que trabajar en forma bastante acelerada para que el trabajo se complete en esta fecha”²⁶.

Finalmente, el Código de minería junto a la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras fueron resultado del triunfo del proyecto neoliberal, configurando así una política minera dedicada a las empresas y al desarrollo de estas. Al respecto *El Mercurio*²⁷ especificó la estabilidad dada por la legislación para el desarrollo de la pequeña y mediana minería, es decir, el trasfondo fue asegurar la circulación de capital y la creación de riqueza.

5. EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN: LAS PERSPECTIVAS REGIONALES INSTITUCIONALES SOBRE LA LEGISLACIÓN Y LAS VOCES DETRACTORAS: LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA NACIONAL

El impacto de la legislación se pudo observar desde una arista empresarial, a través de la percepción que tuvieron las organizaciones mineras. A este respecto, la perspectiva y posición de SONAMI es clarificadora sobre el hecho de que en la época la institucionalidad de la legislación no fue cuestionada, y puede deberse a la represión y violación de los derechos humanos, pero si sugiere, en un primer momento, un posicionamiento favorable de la organización frente a la legislación. Durante la celebración del centenario de la sociedad, su presidente, Manuel Feliú afirmó que:

“La ley y el código que se promulgaron son las herramientas legales que hacían falta para corregir el vacío que, sobre tan importantes materias, existía en Chile. Esto a raíz de las oscilaciones en 30 años de historia entre abrir la minería al impulso privado o reservar los yacimientos al Estado, afirma además que la nueva legislación ampara al pequeño, mediano y gran minero y permite que el Estado actúe como empresario minero”²⁸.

Dicha “perspectiva sobre las oscilaciones de los últimos 30 años” refiere a la nacionalización del cobre que implicó el desarrollo estatal de los yacimientos cupríferos lo que terminaría con la extracción concesionada de los recursos de la Gran minería de Cobre, en cierto punto, la mediana minería y los capitales privados nacionales quedarían fuera del desarrollo y extracción del cobre. Si bien es cierto, este análisis permite explicar algunas de las razones por las cuales SONAMI consideró que el Código minero y la ley minera

ampararon a estos estratos, es plausible pensar que el desarrollo de la pequeña minería bajo una extensión total de nacionalización del cobre permitiría, de cierta manera, un desarrollo más profundo y una mejoría de la clase obrera. Lo cierto es que, el impacto sustantivo de la legislación contribuyó a la limitación de la pequeña minería, por las causas y razones que ya hemos explicado. No obstante, siguiendo el planteamiento del presidente de SONAMI, la legislación de la dictadura no fue la continuidad después del cambio que significó la nacionalización del cobre, sino que fue la reforma completa de los elementos más importantes del desarrollo de la minería.

El impacto generado en las asociaciones mineras regionales, para diferenciarlas de SONAMI y su postura a favor y sin crítica de la legislación, tuvieron también presencia dentro del espectro nacional. Por ejemplo, los representantes de la asociación gremial de Coquimbo solicitaron a la junta militar la consideración de los puntos que entraban a afectar a la pequeña y mediana minera, de no ser posible, demandaron la suspensión de la vigencia del Código hasta que la discusión sobre los puntos se realizara.²⁹

Otra organización que se pronunció sobre la legislación en materia minera fue la Organización de Estados Americanos (OEA), en momentos en los cuales, el Código de minería atraía bastante expectativa sobre los mercados mundiales y particularmente sobre las implicancias regionales, recordemos que en 1976 Chile concretó la salida del Pacto andino, cuyas consecuencias fueron graves.

La secretaría de la OEA formuló un texto, que pudo ser encontrado en los documentos del ministerio de minería, este repasó las principales modificaciones realizadas por la junta militar a la legislación, comparándolas con el Código de minería de 1932. El texto titulado “A Statement of the laws of Chile in matters affecting business”³⁰ se publicó en algún momento entre 1977 y 1980 y detalló las principales características del Código, describiendo particularmente el proceso administrativo que se requiere para la obtención de una concesión minera y los minerales que estaban sujetos a la misma.

Previo a la promulgación del Código y la entrada en vigencia de la ley de concesiones mineras, es posible observar el impacto que estas tuvieron a través de la solicitud que realizó la embajada de Chile en Washington de las normas vigentes de la minería, según se expresa en el oficio ordinario de respuesta del Ministerio de minería remitido al Subdirector de asuntos económicos bilaterales de Cancillería se le envió la Ley orgánica constitucional de concesiones mineras a la espera de la promulgación del Código.³¹

Evidentemente se contaba con cierta expectación de parte del país de donde provenían la mayoría de las empresas exportadoras de cobre en Chile, lo llamativo de esto es que, durante todo el proceso de modernización de la legislación minera, diversos organismos estuvieron pendientes de los avances en esa materia, la promoción en el extranjero del DL 600 al inicio del presente estudio, culmina de alguna forma con la repartición de ejemplares del código y de la ley minera.

Esto se puede apreciar a través de la publicación en la edición del 7 de diciembre de 1983 de la revista de negocios “Business Latin America” editado por la firma del mismo nombre con sede New York que está dedicado principalmente a las firmas trasnacionales con intereses o negocios en América latina y que tiene publicación restringida a grupos de inversión y corporaciones con presencia mundial.

La señalada publicación es indicativa de la perspectiva de las trasnacionales sobre la legislación y de cómo esta afectó directamente a sus intereses. Al respecto, la tesis que sostenemos sobre una legislación que fue hecha a la medida de las empresas nos permite comprender que los elementos que gestaron la legislación se orientaron hacia apaciguar a los capitales luego de la nacionalización del cobre y después a entregarles las condiciones y garantías de desarrollo que promovió que en Chile se instalara un sistema de extracción minera basado en la extracción de recursos que produjera crecimiento sin desarrollo sostenido por una economía de libre mercado.

La promulgación del Código y de la ley minera provocó diversas reacciones y opiniones en el ámbito político y público, no obstante, surgieron detractores de esta política desde las fuerzas armadas, tal es el caso del General (R) Guillermo Pickering quien en una declaración en la revista APSI en 1983 en su calidad de representante del Comité de defensa del cobre se declaró abiertamente en oposición a la política minera neoliberal. Pickering³² afirmó que el Código de minería atentaba contra la seguridad nacional y limitaba la libertad soberana del país, a causa del carácter estratégico del cobre:

“La educación que me entregó las fuerzas armadas es que el país necesita un cierto grado de autarquía lo que implica una protección de la industria nacional, ayudar a la agricultura y fundamentalmente defender materias primas que son de carácter estratégico como el cobre.”³³

En este sentido, la defensa del cobre se basó en función de la necesidad de que el desarrollo del país esté basado en la absorción de la riqueza a través del desarrollo de sus fuerzas productivas, la nacionalización del cobre buscó finalmente administrar la explotación y la producción así como la comercialización de los recursos en función de la industrialización programada, por el contrario, el proyecto de la junta se dirigió a limitar el desarrollo estatal y conceder a capitales foráneos los recursos para su desarrollo.

Esto puede ser observado a través de las declaraciones del ministro de economía Samuel Lira durante el discurso del centenario de SONAMI quien afirmó: “se han dictado normas, claras, estables y equitativas para incentivar proyectos mineros por el sector privado nacional o extranjero, en algunos de los cuales aparece el Estado participando como socio, por haberse estimado posible y conveniente para el país”.³⁴

El llamado a defender la soberanía nacional se sustentó, por una parte, en la medida en que la crisis hacía visibles los efectos en la economía nacional, y mientras estos se iban produciendo la junta militar siguió legislando “como si no hubiese pasado nada” a la par de ir “maquillando” la crisis y sus alcances, en este sentido la periodista Olivia Mönckeberg en un artículo para Análisis

observó: “El presente se puede caracterizar por los desfalcos contra el pueblo de Chile que se han venido gestado en los últimos meses. Estos desfalcos se componen de la entrega de recursos nacionales a privados nacionales o extranjeros.”³⁵

6. CONCLUSIONES

La propuesta de estudio la política minera neoliberal y la pugna de proyectos al interior de la junta militar nos llevó a problematizar las rupturas y sus avatares, realizando el ejercicio de abordar el rol que tuvieron los neoliberales en la institución de una política minera y para responder dichas cuestiones, se ha examinado tanto la instauración de las normativas legales, las implicaciones políticas, así como también las voces detractoras.

La promulgación del Decreto de ley 600 estableció garantías de inversión para los capitales extranjeros y que, como pudimos observar, se tradujo en la acumulación de concesiones de exploración. La pregunta que subyace y que resulta inevitable ¿Si las condiciones estaban dadas a través del estatuto de la inversión extranjera, cual fue el objetivo de modificar el resto de la legislación?

La ley de concesiones mineras trajo consigo un cambio de paradigma en relación con lo que se había comprendido por actividad minera e inversiones al convertir el recurso natural en bien transable en el mercado y en propiedad privada de quien obtiene una concesión.

El Código de minería por su parte resultó ser la consumación del desarrollo de una legislación minera propugnada por la visión neoliberal de la economía. Cuyos principios elementales fueron configurados en función de las medidas adoptadas por la política de privatización extensiva de la junta militar. La importancia que este tuvo en la política militar radicó en el mejoramiento y la integración de las medidas neoliberales en un Código que estableció la normativa sobre la cual se regiría desde ese momento y hasta el día de hoy, toda la minería.

La pugna entre dos posturas contrarias sobre el proyecto económico dentro de la junta militar permite no solo observar el ascenso del pensamiento de libre mercado en desmedro del nacional-desarrollismo en las fuerzas militares sino que también permite dar sustento a las razones por las cuales se gestó en el proceso la legislación minera, ya que tanto el código minero como la ley de concesiones mineras se sustentaron en la insuficiencia del estatuto de la inversión extranjera y en la necesidad de entregar garantías a las inversiones reforzando el derecho de la concesión minera.

Por lo tanto, las transformaciones que el neoliberalismo buscó instalar en la actividad minera a través de la legislación implicaron el nacimiento de una minería transnacional, de extractivismo acelerado, dejando atrás algunas de las prácticas mineras conocidas hasta ese momento e inaugurando nuevas formas, caracterizadas por el predominio de explotación irracional, Estado regulador de la práctica minera y comercialización de bienes y no recursos.

Finalmente, para lograr la privatización de la minería debían sortear el problema del dominio eminente, por cuanto fue necesario modificar completamente la política minera, transformando así a través de la concesión plena el dominio eminente a dominio patrimonial. Dicho de otra forma, no fue enteramente necesario modificar la relación legal de la actividad minera, sino que modificar la relación del Estado con la minería. Esto último insertado en la política de privatizaciones, dándole a la minería el carácter de privado, despojando así al Estado de los recursos.

7. BIBLIOGRAFÍA.

AGACINO, RAFAEL; GONZÁLEZ, CRISTIÁN Y ROJAS JORGE. 1998. *Capital Transnacional y trabajo. El desarrollo minero en Chile*. Santiago: Editorial LOM.

BOHOSLAVSKY, JUAN PABLO; FERNÁNDEZ, KARINNA Y SMART SEBASTIÁN, EDITORES. 2018. *Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza*. Santiago: Editorial LOM.

CARVAJAL DEL MAR, ZUNILDA. 2014. L'évolution du droit minier chilien (1874-1971). *Amérique Latine Histoire et Mémoire, les Cahiers ALHIM*, 28. <https://doi.org/10.4000/alhim.5065>

CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS. 1992. El ladrillo, bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: Centro de estudios públicos.

CORVALÁN MÁRQUEZ, LUIS. 2001. *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*. Santiago: Editorial América en movimiento.

FFRENCH-DAVIS, RICARDO Y BÁRBARA STALLINGS, EDITORES. 2001. *Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973*. Santiago: Editorial LOM.

FOLCHI DONOSO, MAURICIO. 2003. La insustentabilidad del “Boom” minero chileno: cobre, política y medio ambiente 1983-2003. *Ecología política* 26 (2003): 23-50.

GÁRATE, MANUEL. 2012. *La revolución capitalista de Chile: 1973-2003*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

ORTIZ MORALES, XIMENA. 2019. Inversión extranjera y minería privada en contexto dictatorial: El decreto ley 600 y la desnacionalización del cobre. Chile, 1974-1977. *Revista Tiempo Histórico*, octubre 2019, 141-157. <https://doi.org/10.25074/th.v0i19.1575>

PALMER, THOMAS. 1920. A Study of the Mining Law of Chile. *University of Pennsylvania Law Review and Law Register* 69/1 (Philadelphia): 48-55. <https://doi.org/10.2307/3314010>

PINTO, JULIO Y RICARDO NAZER. 2004. Nacionalización y privatización del cobre chileno, *Pensamiento crítico, Revista electrónica de Historia*, N° 4.

PIÑERA, JOSÉ. 2002. *Fundamentos de la ley constitucional minera*. Santiago: Economía y sociedad.

VALDIVIA VERÓNICA. 2001 “Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar en Chile 1973-1979”. *Historia (Santiago)* 2001 34: 167-226 <https://doi.org/10.4067/S0717-71942001003400006>

VALDIVIA, VERÓNICA. 2003. *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile 1960-1980*. Santiago: Editorial LOM.

VERGARA BLANCO, ALEJANDRO. 2006. El problema de la naturaleza jurídica de la riqueza mineral. *Revista chilena de derecho*, 33(2), 215-244. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372006000200002>

VERGARA, PILAR. 1984. Auge y caída del neoliberalismo en Chile. Un estudio sobre la evolución ideológica del régimen militar. Santiago: Documento de trabajo. Programa FLACSO, N°216.

VI. FUENTES DOCUMENTALES.

Archivo Nacional de la Administración, Santiago de Chile, Ministerio de Minería. (MMINSARNAD). Revisado entre 1974 y 1983.

- Volumen 328.
- Volumen 329.

Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago de Chile, corporaciones Legislativas y diarios de sesiones (BCN). [En línea] Revisado entre 1974 y 1983.

- Ley 17.450 Reforma a la Constitución Política de Chile. 1971.
- Constitución Política de Chile. 1980.
- Decreto Ley 600, Estatuto de la inversión extranjera. 1974.
- Ley 18.097 Ley orgánica constitucional de concesiones mineras. 1981.
- Código de minería. 1983.

Biblioteca del congreso nacional, Santiago de Chile, corporaciones Legislativas y diarios de sesiones (BCN). [En línea] Revisado entre 1974 y 1983.

- Acta Secreta N° 229-A, 29 de agosto de 1975.
- Acta Secreta N° 33/81, 3 de noviembre de 1981.
- Acta secreta N° 9/83-E, 17 de mayo de 1983.
- Acta Secreta N° 10/83, 17 de mayo de 1983.

Diario El Mercurio. Revisado entre 1974 y 1983. En Biblioteca nacional de Chile (BNC), Sala Fray camilo Henríquez.

- 21 de enero de 1982
- 24 de mayo de 1983
- 5 de agosto de 1983

NOTAS AL FINAL

¹La discusión en torno al dominio eminente y otros tipos de dominios dentro del derecho minero fue larga y compleja en la época. Hemos intentado explicar de forma simple un debate que en términos de derecho minero es mucho más largo y matizado.

²Ley 17.450. Reforma a la Constitución del Estado. 1971. Artículo I, Inciso B.

³El ladrillo. 1992. bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago, Centro de estudios públicos.

⁴*Acta Secreta* N° 229-A, 29 de agosto de 1975. Biblioteca del Congreso Nacional, (BCN) Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones, Revisado en su versión online.

⁵“Lista para su publicación la ley de concesiones mineras”, *El Mercurio*, 21 de enero de 1982. P. A1.

⁶Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, ley 18.097. Título IV, Artículo 18.

⁷Informe técnico de José Piñera. En Agacino Et. Al. 1998. p. 38.

⁸*Ibid.*, p. 25.

⁹*Acta Secreta* N° 281-A, 9 de septiembre de 1976. Biblioteca del congreso nacional, Santiago de Chile, Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones (BCN). Revisado en su versión online., 26.

¹⁰*Ibid.*, p. 27.

¹¹*Acta Secreta* N° 168, 11 de noviembre de 1974. Biblioteca del congreso nacional, Santiago de Chile, Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones (BCN). Revisado en su versión online., 13.

¹²BCN, *Acta Secreta* N° 33/81, 3 de noviembre de 1981. Biblioteca del congreso nacional, Santiago de Chile, Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones (BCN). Revisado en su versión online p. 41.

¹³*Ibid.*, p. 42.

¹⁴Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, Ley 18.097. 1982. Título II, Artículo 8.

¹⁵Código de minería de la República de Chile. Título III, Artículo 28 y Título X, Artículo 166.

¹⁶BCN, *Acta Secreta* N° 33/81, 3 de noviembre de 1981. p. 51.

¹⁷El mineral El Indio fue un yacimiento polimetálico ubicado en la cordillera de la región de Coquimbo. Se caracterizó por ser uno de los primeros yacimientos de gran minería prospectado y explotado bajo la implementación de la política minera neoliberal, en él se desplegaron todas las medidas legislativas durante su desarrollo. Fue explotado desde 1980 hasta el año 2002 cuando cerró sus faenas.

¹⁸Código de minería de la República de Chile 1983. Título I, Artículo 2.

¹⁹Oficio N°317, 25 de marzo de 1975. Archivo Nacional de la Administración, Santiago de Chile, Ministerio de Minería. (MMINARNAD). Vol. 329, s/f.

²⁰“Código de minería” *El Mercurio*, 24 de mayo de 1983. P. A3.

²¹*Acta secreta* N° 9/83-E, 17 de mayo de 1983. Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones. Revisado en su versión online., p. 3.

²²*Ibid.*, p. 4.

²³“Afirmó ministro del ramo: nuevo código favorece a pequeños mineros” *El mercurio*, 5 agosto de 1983. Pp. C1 y C2.

²⁴*Acta secreta* N° 9/83-E, 17 de mayo de 1983. Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones. Revisado en su versión online., p. 22.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Acta Secreta* N° 10/83, 17 de mayo de 1983. Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) Corporaciones Legislativas y diarios de sesiones. Revisado en su versión online., p. 2.

²⁷“Afirmó ministro del ramo: nuevo código favorece a pequeños mineros” *El mercurio*. Pp. C1 y C2.

²⁸“Centenario de Sonami” diciembre 1983. Sonami, Boletín informativo.

²⁹Carta dirigida a ministro Samuel Lira Ovalle, 9 de diciembre de 1983. Archivo Nacional de la Administración, Santiago de Chile. Ministerio de Minería. (MMINARNAD). Vol. 483, f1 a f9.

³⁰A Statement of the laws of Chile in matters affecting business, sin fecha. Archivo Nacional de la Administración, Santiago de Chile, Ministerio de Minería. (MMINARNAD), Vol. 382, f168 y f168v.

³¹Oficio N° 91, 4 de marzo de 1983. Archivo Nacional de la Administración, Santiago de Chile, Ministerio de Minería. (MMINARNAD), Vol. 483, s/f.

³²María Ester Aliaga, “Entrevista a General (R) Guillermo Pickering: ‘El código minero atenta contra la seguridad nacional’”, Revista APSI, diciembre 1983, Entrevista.

³³María Ester Aliaga, “Entrevista a General (R) Guillermo Pickering.

³⁴“Centenario de SONAMI”, SONAMI, diciembre 1983, Boletín informativo.

³⁵María Olivia Mönckeberg, “Momento económico: Enajenaciones del presente”, Revista Análisis, agosto de 1983, Nacional.

Fecha recepción: 7 de octubre 2022

Fecha aceptación: 15 de enero 2023

Versión Final: 10 de marzo 2023